Mayo 2016

<u>PERŰ</u>

La bancarización en Perú



Se define bancarización como el grado de utilización, de forma estable y continuada, de los distintos productos y servicios financieros existentes en un país. Y, para medir la bancarización, se utilizan diferentes indicadores que atienden a la profundidad, cobertura e intensidad de uso. Existe una correlación positiva entre el desarrollo del sistema financiero de un país y su crecimiento económico. Por tanto, analizando la bancarización de una economía cualquiera, se puede obtener una gran cantidad de información sobre su situación y su potencial.

Los niveles de bancarización de América Latina están lejos de los que corresponderían a una región con su nivel de renta. De acuerdo al Global Findex del Banco Mundial, que mide la inclusión financiera en el mundo, sólo el 54% de la población latinoamericana declaró tener una cuenta bancaria en 2014. Este porcentaje es bastante escaso para una zona cuya renta per cápita superaba los 9.000 dólares ese año.

En general, la evolución de la bancarización en América Latina ha sido positiva en los últimos tiempos a causa de su favorable dinamismo económico, con unas tasas de crecimiento y flujos de inversión extranjera muy elevados. Existen, no obstante, grandes diferencias dependiendo de la nación que se analice. Destaca el caso de Panamá, con un nivel de bancarización que supone el 175% del PIB, puesto que se trata del centro financiero de la región. Chile, por su parte, ocupa el segundo lugar con un 76% del PIB, al tener un sistema financiero más desarrollado que sus vecinos.



En el caso peruano, las cifras de acceso financiero medidas por la profundidad de la bancarización han alcanzado el 32,86% del PIB tras varios años de evolución positiva. Sin embargo, el país andino sigue ocupando el puesto 11 de 18 en el ranking de bancarización de Iberoamérica. Asimismo, si se analiza desde el punto de vista de la

cobertura bancaria, el desarrollo sigue siendo muy desigual, debido al reducido número de sucursales por habitante en las zonas rurales.

La desconfianza de los peruanos hacia la banca no resulta extraña si se tiene en cuenta la historia reciente. En particular, el episodio de hiperinflación que sufrió el país en los años 90, cuando el índice de precios alcanzó el 7.000% de variación interanual, lo que ocasionó grandes pérdidas a todos los peruanos y, en especial, a las familias más humildes. De igual manera, existe un desconocimiento por parte de la población de los servicios y productos que ofrecen las entidades financieras, así como unos costes de uso muy elevados, que los sectores más vulnerables de la población no pueden asumir.

De acuerdo con un estudio elaborado por el BBVA, se podría elaborar un perfil del individuo con mayor dificultad de acceso al sistema financiero en Perú. Así, el acceso sería inferior en las áreas rurales, para las mujeres y para las personas de nivel educativo y económico bajo. Al mismo tiempo, del estudio se extraen conclusiones que pueden ayudar a orientar mejor las políticas sociales de inclusión financiera. Por ejemplo, el hecho de poseer una vivienda en propiedad mejora la probabilidad de acceso a los productos y servicios bancarios, y también resulta más probable que las familias acudan a las entidades financieras cuando necesitan financiación que cuando tienen capacidad de ahorro. Este último hecho explicaría el fuerte desarrollo de las entidades dedicadas a las microfinanzas, que han ayudado a elevar, en gran medida, los niveles de bancarización en las zonas de acceso más difícil.

En este sentido, hasta relativamente poco, el hecho de vivir en zonas poco pobladas disminuía notablemente probabilidad de acceso al sistema financiero. Sin embargo, este tiene aspecto cada vez una incidencia menor, precisamente debido al desarrollo de mecanismos alternativos. Ejemplo de ello es el sistema de banca móvil, mediante el cual se puede hacer uso de los servicios financieros (pago recibos, envío de remesas, recarga



de telefonía móvil, pago en comercios etc...) a través del menú principal del teléfono.

El gobierno peruano ha impulsado iniciativas para incrementar la bancarización. En julio de 2015 lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), donde se establecía el marco regulatorio, así como las principales medidas a tomar para la consecución de una serie de objetivos para el año 2021. La ENIF es el resultado del trabajo de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF), órgano formado por los actores públicos y privados del campo de la economía y finanzas, educativo o del sector social.



Ante el escenario económico actual, con los precios de las materias primas en mínimos históricos, Perú y el resto de América Latina deben más que nunca efectuar reformas estructurales para relanzar su crecimiento. Entre dichas reformas se encuentran las políticas sociales de inclusión financiera. Pese a que el mayor desarrollo del sistema financiero no es un factor de crecimiento en sí mismo, mejorar los niveles de bancarización es positivo tanto para las entidades, que aumentan las cifras de negocio, como para la población. Un sistema financiero estable y desarrollado reduce los costes de transacción y actúa como canalizador de los recursos entre ahorro e inversión a los proyectos más eficientes. Igualmente, un sistema financiero más inclusivo podría elevar la liquidez tanto de las familias como de las empresas, lo que favorecería el incremento del gasto y de la inversión y aumentaría, en definitiva, la demanda del país. Por todo lo anterior, apostar por el desarrollo del sistema financiero puede ser útil para potenciar el desarrollo económico, potenciar la pobreza y, en definitiva, elevar el bienestar de la población de un país.

